

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

Bogotá D.C, ocho (8) de abril de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA	ACCIÓN DE TUTELA
RADICACIÓN	Nº. 2022-00224
ACCIONANTE	JENNIFER ROCHA ORTIZ
ACCIONADO	UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS.
DECISIÓN	CONCEDE ACCIÓN DE TUTELA.

Procede el Despacho a resolver la acción de tutela instaurada por la señora **JENNIFER ROCHA ORTIZ**, en contra de la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO:

La señora **JENNIFER ROCHA ORTIZ** interpuso acción de tutela por considerar vulnerado el derecho a la igualdad y de petición, con fundamento en los siguientes:

HECHOS (SÍNTESIS):

1. Informa que presento el 11 de febrero de 2022 ante la entidad accionada escrito de petición, solicitando una fecha cierta para recibir las “cartas cheque”, entendiendo que cumplió con los requisitos de diligenciamiento de formulario y actualización de datos.
2. Alega que la accionada no ha contestado su petición de fondo, por cuanto, no ha dado una fecha cierta en la que se va a efectuar el desembolso de la suma de la indemnización por el desplazamiento forzado.
3. Aclara que el requerimiento por la accionada en anteriores respuestas de iniciar el PARRI, ya se efectuó.
4. Afirma que ya diligencio el formulario del plan individual para la reparación integral (PIRI), recibiendo indicación por la accionada que pasado un mes podía reclamar la carta cheque para cobrar la indemnización.

PRETENSIONES:

Por lo tanto, acude la accionante al aparato judicial para que se le tutelen los derechos fundamentales vulnerados, ordenando al **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS** contestar de fondo la solicitud efectuada.

REGLAS DE COMPETENCIA:

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

ADMISIÓN Y LITIS:

La presente acción de tutela fue admitida mediante auto de fecha calendado veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022) y se ordenó notificar a la parte accionada para que ejerciera su derecho de defensa. (Archivo N° 005)

Fenecido el término concedido, la accionada dio contestación adjuntado la respuesta dada a la accionante. (Archivo N° 008)

LEGITIMACIÓN ACTIVA:

La parte actora se encuentra legitimada como persona natural del derecho fundamental invocado, teniendo en cuenta que solo se necesita la condición de persona titular del derecho fundamental, cuyo amparo invoca.

LEGITIMACIÓN PASIVA:

La presente acción se encuentra dirigida en contra de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, por ser la entidad que sería responsable por la acción u omisión vulneradora del derecho objeto de la presente tutela, se encuentra legitimado el extremo pasivo.

CONSIDERACIONES:

PROBLEMA JURÍDICO:

*Corresponde al Juez de tutela, determinar si a la señora **JENNIFER ROCHA ORTIZ** se le están vulnerando su derecho a la igualdad y de petición, al no dar respuesta a la solicitud por ella elevada.*

IDENTIFICACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL INVOLUCRADO:

DERECHO PRESUNTAMENTE VULNERADO:

Señala la accionante como conculcado, principalmente el derecho de petición. La Carta Política, lo plasma en su art. 23 como uno de los derechos constitucionales fundamentales que les asiste a las personas a fin de obtener una pronta resolución a las peticiones que de manera respetuosa se hayan elevado a cualquier entidad pública e incluso particular.

El derecho de petición, visto desde la órbita del estado social de derecho, es ante todo un garantizador de la puesta en marcha de la democracia participativa, estableciendo una efectiva relación persona - Estado, cobijando así muchos otros derechos consagrados como constitucionales como el derecho a la información y a la participación política de los coasociados.

El núcleo esencial del derecho de petición está constituido por la pronta resolución, pues de nada serviría que el ciudadano tuviera la posibilidad de dirigirse a la autoridad si no recibe de ésta una respuesta que resuelva la solicitud elevada.

La respuesta debe ser oportuna, resolverse de fondo de manera clara, precisa y en congruencia con lo solicitado y debe también ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

El caso en concreto:

Así las cosas, procede esta Juez Constitucional al estudio en sede de tutela, indicando que la accionante invoca como derechos conculcados el de petición, e igualdad, supuestamente vulnerados por la entidad accionada.

Con el escrito de tutela se allegó la misiva dirigida a la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS, por medio del cual solicita, se le indique una fecha exacta en la que se le va a desembolsar el recurso por concepto de indemnización, al que tiene derecho por ser víctima del desplazamiento forzado y se le explique porqué se le ha excluido del pago de las vigencias 2021, reclamando a su vez copia de certificación de exclusión en el RUV; reporto como dirección para recibir notificaciones el correo electrónico vargascaballeroruben@gmail.com. La radicación ante la accionada se verificó con el número 2022-711-280167-2 de fecha 11 de febrero de 2022 (página 3 del archivo N° 002).

La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS indicó que la solicitud elevada por la ciudadana fue contestada en debida forma, a través del radicado 20227903317822 de fecha 12 de febrero de 2022, y mediante alcance con radicado de salida N° 20227208033811 del 31 de marzo de 2022, adjuntado prueba de ello. (Archivo N° 008).

Así las cosas, se encuentra que la respuesta emitida por la referida accionada cumple con los caracteres de claridad y congruencia, en la medida que abordó en debida forma los pedimentos formulados por la actora, explicando para el efecto, porque no es dable indicar una fecha exacta para el pago de la indemnización, las razones por las cuales su trámite no ha tenido prelación dado que no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, y cuál es el debido proceso que para el caso en concreto consiste agotar primeramente la etapa del “Método Técnico de Priorización”. Aunado a ello, expidió copia del certificado RUV.

Ahora bien, según consta en la página 11 del archivo 008, las aludidas respuestas fueron remitidas el 31 de marzo de 2021 (posterior a la admisión de la acción constitucional) al correo electrónico vargascaballeroruben@gmail.com, reportada por la actora como su dirección de recibo de notificaciones.

No obstante, de la constancia de notificación no fue factible verificar si junto al alcance con radicado de salida N° 20227208033811 del 31 de marzo de 2022, fue enviada a la accionante la copia del certificado RUV. De ahí que, no hay lugar a derivar que la petente efectivamente recibió el documento referido como anexo en la respuesta.

En este orden de ideas, se demostró que el derecho de petición está siendo vulnerado a la señora JENNIFER ROCHA ORTIZ por parte de la encartada, habida cuenta que, su actuar no cumple con los presupuestos normativos que constituye el núcleo esencial del derecho de petición, esto es, que además de haber emitido la respuesta de manera precisa y clara, debió haber puesto en conocimiento a la interesada no solo el comunicado, sino, sus anexos, como quiera, que la vulneración del derecho de petición se generara no sólo por falta de respuesta sino igualmente por falta de notificación de la misma.

Así, probado como se encuentra el desconocimiento del derecho de petición a la accionante por parte de la UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y verificados los hechos expuestos en el libelo introductorio de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, se tutelaré el derecho citado ordenando a la accionada que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde la fecha de recibo de la respectiva notificación, proceda a comunicar en debida forma a la accionante la respuesta a su solicitud con el respectivo anexo, en las formas previstas en la Ley 1755 de 2015.

POR MÉRITO DE TODAS LAS CONSIDERACIONES PLASMADAS EN LA PARTE MOTIVA DE ESTE PROVEÍDO, ESTE JUZGADO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER el amparo constitucional solicitado por la accionante **JENNIFER ROCHA ORTIZ**, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la **UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS**, que en el término de cuarenta y ocho horas (48), contadas a partir de la notificación de esta sentencia, proceda a comunicar en debida forma a la señora **JENNIFER ROCHA ORTIZ**, de la respuesta emitida mediante radicado N° 20227208033811 del 31 de marzo de 2022, con el anexo correspondiente.

NOTIFICAR de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

TERCERO: De no ser impugnada esta decisión, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

SANDRA MEJÍA MEJÍA
JUEZ

*JUZGADO VEINTINUEVE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ D.C.*

El anterior auto se notificó por estado No. 41

Hoy 18 de abril de 2022

CAROLINA SANTAMARIA LUNA
Secretaria

CJ

Firmado Por:

Sandra Mejia Mejia
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Familia 29 Oral
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Código de verificación: **f364bce58a5d0b7175df011772af83eb4c9e7c5df02feecd9804ebd3cd70e5ae**

Documento generado en 08/04/2022 05:00:47 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>